Bogotá, D.C. 4 de noviembre del 2014

Doctor

**JAIME BUENAHORA FEBRES.**

Presidente Comisión Primera

Cámara de Representantes

**REF:** INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL **PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 076 DE 2014 CAMARA acumulado al PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 079 de 2014 “Por el cual se modifican los artículos 323, 259 y 260 de la constitución política de Colombia”.**

Respetado Doctor Jaime Buenahora:

En cumplimiento del encargo impartido, nos permitimos remitir a su Despacho, con el fin que se ponga a consideración para discusión de la Honorable Plenaria, el informe de ponencia para segundo debate al **PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 076 DE 2014 CAMARA acumulado al PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 079 de 2014 “Por el cual se modifican los artículos 323, 259 y 260 de la constitución política de Colombia”.**

Cordialmente,

**CLARA ROJAS JUAN CARLOS LOZADA VARGAS**

Representante a la Cámara. (C) Representante a la Cámara (C).

**CARLOS ARTURO CORREA MOJICA EDWAR D. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.**

Representante a la Cámara (C). Representante a la Cámara.

**OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE. CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO.**

Representante a la Cámara. Representante a la Cámara.

**ANGELICA LIZBETH LOZANO CORREA. JOSÉ RODOLFO PÉREZ SUÁREZ**

Representante a la cámara Representante a la cámara

**JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ. JOSÉ EDILBERTO CAICEDO.**

Representante a la cámara Representante a la Cámara.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y JUSTIFICACIÓN.**

**TRAMITE DE PRIMER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE LA CÁMARA.**

En la sesión del martes 28 de octubre del 2014 se puso a consideración para discusión y votación de los miembros de la Comisión Primera el proyecto de acto legislativo precitado. En el desarrollo del debate, se escucharon las intervenciones de los ponentes iniciando por la Representante CLARA ROJAS en la que expuso las bondades de la elección popular de alcaldes locales para Bogotá, consignadas estas en la exposición de motivos del proyecto y que profundiza en la descentralización y autonomía para darles a las comunidades la opción de escoger sus propias autoridades mediante la participación directa. Acto seguido, hace su intervención el Representante JUAN CARLOS LOZADA VARGAS, quien enfatiza en la necesidad conveniente de consagrar la elección popular de alcaldes locales en Bogotá como un mecanismo puro de participación democrática de la comunidad en la toma de sus propias decisiones. También, se escucharon voces positivas en favor de la cosagración de esta figura de los Representantes OSCAR BRAVO (Nariño), HERIBERTO SANABRIA (Valle del Cauca), EDWARD RODRIGUEZ (Ponente Bogotá), BERNER SAMBRANO (Nariño), ALBEIRO VANEGAS (Arauca); pero también se oyeron voces en contra de la iniciativa como las de los Representantes RODRIGO LARA, GERMÁN NAVAS, ANGÉLICA LOZANO y JOSÉ EDILBERTO CAICEDO.

En la misma sesión se aprobó el proyecto de acto legislativo con la votación requerida por la Constitución Política y la Ley, sin modificación al texto propuesto.

1. **COMPETENCIA**

La Comisión Primera del Congreso de la República es competente para conocer del PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 076 DE 2014 CAMARA “por el cual se reforma el artículo 323 de la Constitución Política de Colombia” acumulado al PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 079 de 2014 CAMARA “por el cual se modifica el artículo 323 de la Constitución Política, para consagrar la elección popular de los Alcaldes Locales del Distrito Capital de Bogotá”. A este respecto tenemos:

 **Constitución Política.**

ARTICULO  114**.**Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.

 **Ley 5ª. de 1992**.

ARTICULO 221**.** Acto Legislativo. Las normas expedidas por el Congreso que tengan por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales, se denominan Actos Legislativos, y deberán cumplir el trámite señalado en la Constitución y en este Reglamento.

**Ley 3 de 1992.**

Artículo 2º. Comisión Primera. Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de Representantes, conocerá de: **reforma constitucional**; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos.

La presente ponencia se desarrollará de la siguiente manera:

1. Competencia
2. Marco constitucional y legal.
3. Objeto del proyecto de acto legislativo.
4. Consideraciones.
5. Conclusiones
6. Pliego de modificaciones.
7. Proposición.
8. Texto de articulado propuesto para primer debate.

**2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL.**

**De República Unitaria a las Localidades.**

Dentro de los mecanismos de organización administrativa, el constitucionalismo colombiano ha hecho gran esfuerzo por encuadrar la Teoría del Estado y la organización administrativa a la contemporaneidad jurídica colombiana, con el propósito de satisfacer las necesidades de las comunidades locales, y que éstas decidan autónomamente sus autoridades, y el desarrollo de su zona en el marco de la participación ciudadana dispuesta por la propia Constitución.

Como se dijo anteriormente, aunque nuestro país es una República unitaria, nuestra Constitución Política consagra la división territorial y organiza al Estado en entidades territoriales con base en los principios de descentralización y autonomía, y sobre este concepto, destaca la participación ciudadana.

Con base en estos principios de organización territorial, establece un régimen para la capital de la República que a partir del Acto Legislativo No.1 de 2000 le da el carácter de Distrito Capital. Este régimen especial establece principios sui géneris resaltando dentro de ellos uno de los más particulares**:** las Localidades**,** adoptando por Constitución para ellas las Juntas Administradoras Locales como una de sus autoridades administrativas.

El artículo 41 transitorio facultó al Gobierno nacional –en caso que el Congreso no lo hiciera- a expedir una norma de carácter especial que regulara el régimen para Bogotá, lo cual hizo a través del Decreto Ley 1421 de 1993.

Así las cosas, las Localidades son una organización político-administrativa dentro del Distrito Capital diseñada para permitirle al ciudadano participar en los asuntos que los afecten directamente con el propósito de determinar la práctica de la descentralización y la autonomía, pero bajo la égida de un poder administrativo central.

La organización administrativa distrital ha venido evolucionando. Con anterioridad a la Constitución de 1.991 y antes de 1905, Bogotá estuvo sometida al régimen municipal ordinario. A partir de este año y por medio de la Ley 17 se organizó a Bogotá como Distrito Capital administrado por el Gobierno nacional, cuyos gobernantes eran nombrados y removidos por el presidente de la República de forma libre.

 En 1908 el Acto Legislativo 2 señaló que en cada municipio habría un Concejo municipal y un Alcalde al cual le correspondía la acción administrativa, pero tenía el carácter de agente directo del Ejecutivo nacional. Mediante Acto Legislativo 1 de 1.945 se consagra que Bogotá se organiza como Distrito Especial, ya no sujeto al régimen municipal ordinario. En 1.954 por medio del Acuerdo 11 se crean las Alcaldías menores para facilitar la administración debido a la extensión del territorio. En 1973 se divide el territorio del distrito en 16 circuitos llamados Alcaldías menores; en cada uno de estos, existe un Alcalde menor como agente directo del Alcalde de la ciudad. Los Acuerdos 14 de 1.983 y 9 de 1.986 completan las 20 zonas en las que está dividida hoy la Capital de la república. Finalmente, el Acto Legislativo 1 de 1.986 estableció la elección popular de Alcaldes en un ejemplo y afán de corregir las fallas en el plano administrativo debido a que el control ejercido por la autoridad central reduce en la práctica la autonomía concedida, ya que los delegados terminan ejerciendo casi en su totalidad las competencias de un orden administrativo.

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:**

**PREÁMBULO**

Consideramos que el preámbulo de nuestra Carta Fundamental evoca unos presupuestos filosóficos que deberán orientar la actividad de nuestros mandatarios para garantizar que los ciudadanos se sientan profundamente vinculados y se les reconozca por el ordenamiento jurídico su participación activa al Estado Colombiano para garantizar que el poder político se genere dentro de un marco jurídico democrático y participativo que brinde un orden político, económico y social justo.

**ARTICULO 1**. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

**ARTICULO 2**. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

**ARTICULO 3**. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

**ARTICULO 40**. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

**ARTICULO 95**. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

**ARTICULO 103**. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

**ARTICULO 114**. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.

**ARTICULO 125**. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

PARAGRAFO. Adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2003. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2008, así: Durante un tiempo de tres (3) años contados a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la Comisión Nacional del Servicio Civil implementará los mecanismos necesarios para inscribir en carrera administrativa de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público a los servidores que a la fecha de publicación de la Ley 909 del 2004 estuviesen ocupando cargos de carrera vacantes de forma definitiva en calidad de provisionales o de encargados del sistema general de carrera siempre y cuando cumplieran las calidades y requisitos exigidos para su desempeño al momento de comenzar a ejercerlo y que a la fecha de la inscripción extraordinaria continúen desempeñando dichos cargos de carrera. Igual derecho y en las mismas condiciones tendrán los servidores de los sistemas especiales y específicos de la carrera, para lo cual la entidad competente, dentro del mismo término adelantará los trámites respectivos de inscripción.

Mientras se cumpla este procedimiento, se suspenden todos los trámites relacionados con los concursos públicos que actualmente se están adelantando sobre los cargos ocupados por empleados a quienes les asiste el derecho previsto en el presente parágrafo.

La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá desarrollar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación del presente acto legislativo, instrumentos de calificación del servicio que midan de manera real el desempeño de los servidores públicos inscritos de manera extraordinaria en carrera administrativa.

Quedan exceptuados de estas normas los procesos de selección que se surtan en desarrollo de lo previsto por el artículo 131 de la Constitución Política y los servidores regidos por el artículo 256 de la Constitución Política, carrera docente y carrera diplomática consular.

NOTA: El Acto Legislativo 01 de 2008, fue declarado INEXEQUIBLE en su totalidad por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-588 de 2009.

**ARTICULO 184**. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.

**ARTICULO 260**. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale.

**ARTICULO 323**. Modificado por el Acto Legislativo 02 de 2002.

Primer Inciso Modificado por el Acto Legislativo 03 de 2007, así:

El Concejo Distrital se compondrá de cuarenta y cinco (45) concejales.

*Texto anterior:*

*El concejo distrital se compondrá de un concejal por cada ciento cincuenta mil habitantes o fracción mayor de setenta y cinco mil que tenga su territorio.*

En cada una de las localidades habrá una junta administradora elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que estará integrada por no menos de siete ediles, según lo determine el concejo distrital, atendida la población respectiva.

La elección de Alcalde Mayor, de concejales distritales y de ediles se hará en un mismo día por períodos de cuatro (4) años y el alcalde no podrá ser reelegido para el período siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde mayor para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará alcalde mayor para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

Los alcaldes locales serán designados por el alcalde mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora.

En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor.

Los concejales y los ediles no podrán hacer parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas.

**ARTICULO   259.**Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático.

**ARTICULO   260.**Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale.

**JURISPRUDENCIA.**

**SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL 011 DE 1994**

“Considera la Corte que la anterior disposición es contraria a la normatividad y al espíritu de la Constitución, puesto que con ella se está desvirtuando claramente el propósito que animó al Constituyente a plasmar en la Carta Política la elección popular de los alcaldes, mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1986 (Art. 3o.), y la de los gobernadores, por decisión de la Asamblea Constituyente de 1991. En efecto, la evidente intención del Constituyente al dar estos trascendentales pasos hacia la ampliación de los espacios de participación ciudadana en la elección de sus gobernadores, fue la de extenderla a los mandatarios locales, primero, y seccionales, después. En otras palabras, que unos y otros tuvieran siempre origen en la voluntad popular, expresada en las urnas. Es cierto que el Constituyente de 1991 determinó mantener para Colombia la forma de Estado unitario que la Constitución de 1886 había restablecido, pero atemperada por el principio de la "autonomía de sus entidades territoriales" (Art. 1o. de la C.P.). Tal autonomía, que la nueva Carta Política desarrolla, y que es básicamente de carácter administrativo, tiene también un alcance político: la posibilidad de que los ciudadanos elijan en forma directa a sus autoridades tanto departamentales como distritales y municipales (Art. 260 de la C.P.).”

“En otras palabras, al interpretar de manera integral, como son su deber y su potestad, el espíritu de la Constitución Política, para la Corte es claro que al introducir aquella el concepto de democracia participativa (Art. 1o.), al atribuirle la soberanía al pueblo (Art. 3o.), al otorgarle por consiguiente a éste la potestad de revocar el mandato de los elegidos (Arts. 40, num. 5 y 103), y en particular el de los gobernadores y los alcaldes (Art. 259), al determinar la responsabilidad política de los elegidos frente a sus electores (Art. 133) y al disponer, en fin, que los ciudadanos eligen en forma directa, entre otros funcionarios a los alcaldes y a los gobernadores (Arts. 260, 303 y 314), el objetivo esencial que la Constitución persigue en esta materia es el de que al ejercer el pueblo el derecho a elegir sus gobernantes, lo haga con la plenitud de las consecuencias que este derecho implica y que incluyen la de que, al producirse la manifestación de la voluntad popular en las urnas, quien resulte elegido disponga de la totalidad de las atribuciones y del período que la Constitución asigna al cargo. Como según la Carta Política, la revocación del mandato solo es predicable de los gobernadores y los alcaldes, solo a estos funcionarios se aplicará este principio”

En el mismo sentido la Corte Constitucional en sentencia **C-448 de 1997** reitera su tesis al afirmar: “El Legislador desconoció entonces el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que los afectan y a gobernarse por autoridades propias. Además, al otorgar al Presidente de la República o a los gobernadores la facultad de nombrar en propiedad a la primera autoridad municipal, la norma legal establece una sujeción jerárquica de los alcaldes al ejecutivo central, que no está autorizada en nuestro ordenamiento constitucional y que vulnera el contenido esencial de la autonomía de las entidades territoriales”.

3. **OBJETO DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO.**

Desarrollar los principios y normas de la Constitución Nacional que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales, especialmente, aquellos relacionados con los derechos políticos que permitan a los 7.035.155 millones de habitantes de la ciudad de Bogotá, expresar su voluntad soberana para concretar o cristalizar el eje central del Estado Social y Democrático de Derecho, mediante los mecanismos de participación democrática previstos y planteados como una directriz para que los ciudadanos y las ciudadanas de las veinte localidades de Bogotá, estén posibilitados para elegir popularmente a su Alcalde Local.

En ese orden de ideas, es menester aclarar, que por el clamor de vastos sectores académicos y de organizaciones populares de las localidades y de los barrios bogotanos, se hace necesario profundizar la descentralización administrativa de la ciudad y democratizar la organización político-administrativa de Bogotá, a través de una reforma al Estatuto Orgánico Decreto 1421 de 1993, pero particularmente poder ejercer su legítimo derecho a elegir y ser elegido con el fin de administrar los destinos de su localidad.

En este sentido la Carta Política de 1991, incluyó el derecho de la ciudadanía a participar con libertad en la conformación y ejercicio del poder político, pero también para ejercer el control social sobre los planes y proyectos que ejecuten las autoridades en su localidad, lo cual se vería concretado con la reforma propuesta

Para tal efecto, se propone en el proyecto de acto legislativo, modificar solo los incisos tercero, cuarto y sexto del artículo 323 de la Constitución Política para adicionar y permitir también la elección de los alcaldes locales y la suspensión o destitución de ellos por el Alcalde Mayor; la reforma del inciso quinto de dicho artículo, en razón a que los alcaldes locales ya no serían nombrados por el Alcalde Mayor y por ende, las juntas administradoras locales no le enviarían las ternas que actualmente elaboran, conservando en rigor la estructura original de la norma así como su conexidad sistémica, teleológica y unidad temática.

También se adicionan los artículos 259 y 260 para incluir en el primero (artículo 259) a los alcaldes locales del Distrito Capital como funcionarios que puedan ser revocados en razón al incumplimiento del programa que presentara al inscribirse como candidato, y en el segundo (artículo 260), a los mismos funcionarios que en Colombia eligen los ciudadanos en forma directa.

**4. CONSIDERACIONES.**

**ELEMENTOS CONCEPTUALES**

Entendemos la democracia como un régimen político que busca resolver los problemas de legitimidad y legalidad del ejercicio del poder político en una sociedad. Según Norberto Bobbio la legitimidad se relaciona con los orígenes y con el ejercicio del poder[[1]](#footnote-1). En la democracia, a diferencia de otros regímenes políticos, su legitimidad viene dada por el derecho del pueblo y el ciudadano a intervenir en la conformación y en la orientación de los poderes públicos. La legitimidad democrática implica por lo tanto un poder constituido de acuerdo con la voluntad popular o al menos de la mayoría y aceptado libremente.

El tema de la legitimidad en las distintas escuelas de pensamiento filosófico y sociológico se ha centrado en dos modelos de justificación del poder político denominado legitimidad como legalidad formal y legitimidad como legalidad democrática. Los dos modelos hacen de la legalidad el criterio fundamental de la misma, pero se diferencian porque para el primero se trata de un criterio formal que puede ser satisfecho por cualquier tipo de legalidad, mientras que para el segundo modelo la legalidad tiene que obedecer a criterios materiales como la justicia, el consenso y un proceso de construcción democrática.

Al primer modelo, Weber la define como una creencia en la validez de un orden. Este modelo no puede explicar qué ocurre con la legalidad injusta, es decir, no es una ley para garantizar derechos sino para que la ley se obedezca independientemente de su contenido.

El segundo modelo tiene como sus exponentes a John Rawls y particularmente a Jürgen Habermas, quien en su teoría discursiva observa que un poder político es tanto más legítimo en la medida que cuente con el reconocimiento y el consenso no coactivo de quienes obedecen el poder. Esto implica que el poder político legítimo descansa en la autonomía privada y en la autonomía pública de los ciudadanos[[2]](#footnote-2).

Estas consideraciones nos conducen a reflexionar acerca del tipo de democracia que se está practicando en nuestra democracia colombiana particularmente en las veinte localidades del Distrito Capital por cuanto uno de los cuellos de botella sin resolver es que tanto la Constitución Política de Colombia como el Decreto 1421 de 1993 estableció una forma muy sui-generis de escoger a los alcaldes locales en contra vía de los postulados que orientan los principios tutelares de nuestro régimen constitucional como son: la democracia, la participación, la igualdad, la descentralización. Como se puede observar en la redacción del artículo 87 de dicho estatuto“ Los Alcaldes Locales serán nombrados por el Alcalde Mayor de terna elaborada por la correspondiente junta administradora. Para la integración de la terna se empleará el sistema del cociente electoral. Su elaboración tendrá lugar dentro de los ocho (8) días iníciales del primer período de sesiones de la correspondiente junta. El Alcalde Mayor podrá remover en cualquier tiempo los Alcaldes Locales. En tal caso la respectiva junta integrará nueva terna y la enviará al Alcalde Mayor para lo de su competencia”.

La Constitución Política de Colombia define un nuevo marco constitucional democrático y participativo como garantía de estabilidad social y económica. Colombia es un Estado social de derecho, una República unitaria, democrática, participativa y pluralista, fundada en la prevalencia del interés general (art. 1°). “El Estado servirá a la comunidad, para promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (art. 2°). Estos derechos deberán ser garantizados por el Estado.

**GARANTÍA DEL ESTADO EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS**

“Los Derechos y principios referidos anteriormente no tendrían realidad si el propio Estado no garantizara la efectividad de la participación democrática de la ciudadanía en todos los eventos que tenga que ver con su mejor estar, haciendo utópicos y por demás inocuos los mecanismos planteados por el constituyente en representación del pueblo que le confirió ese mandato de reformar las estructuras jurídicas que nos gobiernan y que se presumen de acuerdo al querer del constituyente primario.

En cumplimiento del mandato, el constituyente de 1991, plasmó en la Carta todo un procedimiento que se cree modernamente idóneo en cuanto a la participación del pueblo en la vida democrática del país y para ello dictó una serie de mecanismos que pretenden facilitar esa participación, consolidados primordialmente en los títulos IV y IX, enfatizando que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.

 El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece” (art. 3°), lo cual implica que se ha logrado superar la etapa del Estado del dejar hacer, dejar pasar (laisser faire-laisser passer)”[[3]](#footnote-3).

*Así mismo el Estatuto Supremo consagra el ejercicio del derecho político fundamental del individuo al prescribir en el artículo 40* ***“****Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede elegir y ser elegido*”.(artículo citado por el ponente.)

En su artículo 41 indica la necesidad (y la obligatoriedad) de las “prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana” en su beneficio.; además, el numeral 5° del Artículo 95 exige como una responsabilidad ciudadana “participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”, ya no como un derecho sino como un deber.

Consagra la Constitución en su artículo 103, al hablar de la participación democrática (título IV), que como formas de participación democrática y en ejercicio de la soberanía del pueblo, se tienen mecanismos como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

Para la práctica de estos mecanismos es esencial el voto o sufragio, el cual es definido como el derecho que tiene todo ciudadano para elegir y ser elegido, con el objeto de participar en la toma de decisiones y de formar parte del poder para esa toma de decisiones. Sencillamente, para escoger la persona o personas que lo representen en determinado puesto “alcaldía local” o corporación”[[4]](#footnote-4). Texto incorporado por los ponentes.

Como corolario de estas reflexiones se debe poner en práctica todo el contenido de los principios teleológicos que ubican al ciudadano en el centro de todo el andamiaje jurídico y político para que mediante su participación incidente elija a su mandatario local, cumpliéndose con ello la noción sociojurídica de un Estado con un orden legítimo.

En este orden de ideas los ciudadanos de las veinte localidades de Bogotá no estarían sujetos a una legitimidad como legalidad formal, es decir, siendo sujetos inertes y excluidos del proceso de nombramiento de su autoridad local; al tenor de lo dispuesto del artículo 84 de la ley 1421.

 Por el contrario, atendiendo la propuesta Habermesiana en la cual la elección del alcalde de su respectiva localidad debe ser el producto de una democracia deliberativa y participativa, lo cual legitima el poder político del mandatario local y permite a sus electores un vínculo muy estrecho con las propuestas, con el programa, con sus ejecutorias, con el diseño, elaboración, ejecución y control del Plan de Desarrollo territorializado.

La incorporación y práctica de estos principios sin duda permitirá recobrar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y generar espacios de participación e involucramiento en la disminución de la abstención que entre otras

cosas se genera por la indiferencia del Estado en el desconocimiento de los procesos autónomos de la sociedad y en contravía de la consolidación de la participación.

Esta disfuncionalidad socio-jurídica como más adelante lo demuestran las encuestas a la ciudadanía, marginan al ciudadano de los procesos y de las dinámicas de sus localidades y barrios, de sus propias comunidades, de sus propias localidades y de la ciudad en general.

**SISTEMA ELECTORAL, LEGITIMIDAD Y GOBERNABILIDAD**

Un aspecto del sistema electoral ha estado asociado al problema de la legitimidad, se trata de los bajos niveles de la participación electoral, fenómeno que registra la historia democrática nacional.

Al decir de Sánchez Torres en su obra “Derecho Electoral Colombiano”, la participación es un presupuesto de la convivencia democrática y de la legitimidad del Estado. La convivencia democrática depende de la aceptación voluntaria de las decisiones adoptadas por las mayorías y esto solo es posible cuando esas decisiones son percibidas como legítimas.

 El grado más alto de legitimidad se consigue mediante decisiones en las cuales participa directamente la ciudadanía con su voto.

Es por ello que nuestra Carta Fundamental al plantear como uno de los fines esenciales del Estado el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

**LA LEGITIMIDAD DE LOS MANDATARIOS EN EL DISTRITO CAPITAL**

La legitimidad de los mandatarios distritales en la capital está seriamente cuestionada en razón al grado de abstención. Veamos el siguiente cuadro.

ELECCIÓN DE ALCALDE DISTRITAL.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO ELECCIONES | POTENCIA ELECTORAL | TOTAL VOTACIÓN | ALCALDE ELECTO | VOTOS DEL ALCALDE ELECTO | % DE ABSTENCIÓN |
| 2007 | 4.378.026 | 2.095.629 | Samuel Moreno Rojas | 915.769(43,70 %) | 52,13 |
| 2003 | 3.922.818 | 1.706.701 | Luis Eduardo Garzón | 797.466(46,72 %) | 56,49 |
| 2000 | 3.573.581 | 1.600.843 | AntanasMockusSivickas | 681.017(42,54 %) | 55,21 |
| 1997 | 3.085.789 | 1.318.661 | Enrique Peñalosa Londoño | 619.086(48,82 %) | 57,27 |
| 1994 | 2.664.472 | 787.874 | AntanasMockusSivickas | 492.389(64.51 %) | 70,23 |
| 1992 | 2.622.679 | 649.900 | Jaime Castro Castro | 310.654(48.17 %) | 75,22 |

Fuente: <http://es.wikipedia.org>

Una encuesta más reciente (GALLUP de septiembre de 2014) (ver siguiente gráfico) nos ilustra cuál es el nivel de desaprobación de la ciudadanía bogotana con las dos últimas administraciones distritales reflejan el 85% y 58% respectivamente de desaprobación de la gestión realizada por estos burgomaestres lo cual refleja el inconformismo y la deslegitimación por parte de la ciudadanía de estas administraciones, habida consideración de los innumerables problemas de corrupción y de inestabilidad institucional a que han estado sometidas.



Fuente: Encuesta GALLUP de septiembre de 2014

La siguiente gráfica está relacionada con el contenido de la anterior y su lectura nos informa que el estado anímico de los bogotanos en su percepción de cómo va la ciudad es similar a la manera como se evalúa la gestión de los mandatarios distritales; análisis que sin duda corrobora otras causas importantes en el sentimiento democrático de los ciudadanos que ante estos hechos seguramente acrecerán en cuanto a su escepticismo y su participación en los escenarios institucionales y en su acercamiento de gestión con las entidades públicas.

Fuente: Encuesta GALLUP de septiembre de 2014

**LA REALIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL**

Resulta preocupante para la ciudad capital, que después de varias décadas de consagración de los principios referidos Bogotá siga siendo víctima de la centralización y de la baja y excluyente participación de la ciudadanía que percibe en sus localidades como lejanos y carentes de legitimidad los procesos *de reconocimiento de sus autoridades e instituciones*.

Según Bogotá Cómo Vamos[[5]](#footnote-5) en el año 2007 apenas el 19% de los (as) ciudadanos(as) encuestados considera que la alcaldía local está actuando para mejorar la calidad de vida y solamente el 17% de los entrevistados señala que la gestión de los(as) alcaldes(as) locales tiene un impacto. Según una encuesta contratada por la Secretaría de Gobierno[[6]](#footnote-6). Apenas 17% de los (as) ciudadanos(as) en noviembre de 2007 manifestaba tener algún conocimiento del Plan de Desarrollo Local[[7]](#footnote-7). Aunque no suficientemente precisos, estos indicadores muestran cómo las localidades de Bogotá no han logrado posicionarse como entidades que ofrecen servicios a los (as) ciudadanos(as), aunque han logrado mejorar durante el último año su imagen favorable. Sin embargo la ciudadanía prácticamente no conoce a sus autoridades, solamente el 6% en noviembre de 2007 sabía el nombre del alcalde en ejercicio[[8]](#footnote-8).

Igualmente los datos disponibles sobre organización y participación muestran claramente que la gran mayoría de la población no conoce siquiera los espacios de participación local, apenas ha oído hablar de ellos y una ínfima minoría pertenece o participa. Con la excepción de las juntas de acción comunal, las asociaciones de madres de familia o las asociaciones comunitarias, *el 76% o más de los(as) habitantes no conoce ni ha oído mencionar los espacios de participación sobre los cuales los consultó Bogotá Cómo Vamos en 2007* y apenas el 4% manifiesta pertenecer a alguna organización comunitaria, ONG o grupo de base[[9]](#footnote-9).

La ciudad además presenta elevados niveles de centralización y concentración. Alrededor del 94%del gasto distrital es realizado por entidades del nivel central y descentralizado por servicios—(en el año 2010 se expidió por la administración distrital el Decreto 101 con el propósito de desmontar las Unidades de Ejecución Local, lo cual permitió que el 10% de los recursos del Distrito fueran ejecutados por los Fondos de Desarrollo Local)—, los recursos locales son ejecutados a través de un proceso fuertemente orientado por el centro y co-administrado, y la desconcentración es débil y no se articula con un esquema de promoción de la participación ciudadana y de coordinación interinstitucional.

Resulta evidente que el propósito de crear en Bogotá una nueva forma de gobierno con énfasis en lo local que distribuyera el poder y estimulara un modelo pluralista, participativo y democrático, no se ha cumplido en la ciudad[[10]](#footnote-10).

|  |
| --- |
| **Datos sobre conocimiento y valoración de la gestión local**1. El 27% de los ciudadanos no sabe que Bogotá está dividida en localidades.
2. El 43% no sabe cómo se designa el alcalde(sa) local **y el 41% piensa que se designa por votación popular.**
3. Solamente el 6% sabe cómo se llama el(la) alcalde(sa) local.
4. El 47% no ha oído hablar de las Juntas Administradoras Locales.
5. El 32% no sabe dónde queda la sede de la alcaldía local.
6. El 68% señala que la gestión del(a) alcalde(sa) local no ha tenido ningún impacto sobre ellos y el 14% no sabe o no responde.
 |

Los resultados de esta encuesta obedecen a diversos factores que no han logrado desarrollar los principios democráticos y descentralistas trazados por la Constitución de 1991 para el Distrito Capital; las decisiones de distintas administraciones y los desarrollos normativos debatidos en el Concejo limitaron en extremo el modelo planteado y conllevaron a una descentralización territorial incompleta y desdibujada que no permite el desarrollo político, administrativo y fiscal para las distintas localidades.

Estas adolecen de una definición clara de competencias para la prestación de los bienes y servicios; tampoco tienen autonomía administrativa ni personería jurídica, lo cual obstaculiza su funcionamiento.

A pesar de haberse restablecido la ordenación del gasto con el desmonte de las Unidades de Ejecución Local mediante la expedición del decreto 101 de 2010 “por medio del cual se delega en los Alcaldes o Alcaldesas Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con la estructura establecida en el Plan de Desarrollo Local que esté vigente”.

Se observa todavía una falta de planeación en la gestión local, de baja ejecución financiera, de dispersión en los proyectos y en los programas vinculados a los diferentes ejes; ante todo una ausencia de focalización en el impacto de dichos proyectos así como la carencia de visibilizacion de la ciudadanía beneficiaria seguramente por la falta de inclusión de la misma en el diseño, formulación y seguimiento a los planes, programas y proyectos.

Así mismo las garantías para ejercer las veedurías ciudadanas en el control de la gestión administrativa y financiera de su respectiva alcaldía; todo lo cual puede tener como factor decisivo la carencia de la implementación de estrategias de comunicación y transparencia en los procesos de contratación y de la gestión administrativa en general.

Otro factor es el enfoque sectorial que ha conllevado a que la gestión distrital se considere metropolitana ya que no aborda con claridad y con una estrategia la dimensión territorial-local, algunas entidades como educación, salud, integración social, entre otras, han creado dependencias desconcentradas y han enviado algunos funcionarios con el propósito de desconcentrar funciones sin una articulación clara de objetivos y metas de carácter local.

Concretamente la descentralización de la ciudad carece de localidades con una asignación clara de competencias para la prestación de bienes y servicios que los identifiquen ante la ciudadanía, de personería jurídica y autonomía administrativa apropiada y de recursos de funcionamiento.

 La facultad de ordenación del gasto y de contratación se encuentra legalmente en cabeza del alcalde mayor, que puede delegarla en los alcaldes locales o en otros funcionarios distritales lo cual va en detrimento de una buena gestión, limita a las autoridades distritales, restringe su visibilidad ante la ciudadanía, y genera los bajos resultados señalados anteriormente. A esta situación básica se suman deficiencias en la capacidad de gestión de los funcionarios locales y en la disponibilidad de infraestructuras físicas y tecnológicas. Adicionalmente, los(as) alcaldes(as) locales han sido recargados con funciones delegadas para las cuales en muchos casos no tienen todos los recursos y herramientas requeridas.

En un contexto general, hasta ahora tenemos la presencia de la figura de la desconcentración de funciones administrativas en los entes de las localidades del Distrito Capital; lo que corresponde en adelante es fundamentar el sentido que genera la proyección institucional hacia la descentralización dándole un nuevo giro a la reglamentación constitucional desarrollada por ejemplo en el Estatuto Orgánico de Bogotá Decreto 1421 de 1993. En este último sentido, es que la Norma Superior da vía libre al camino de la real participación política con integralidad en condiciones de equidad e igualdad con el buen sentido democrático. Esto es lo que se busca con el proceso descentralizador del poder orientado al estímulo y a la promoción de la participación popular como estrategia en torno a la creación y consolidación de nuevos espacios para la democracia y la descentralización a través de la elección popular de alcaldes locales.

**LOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES**

La actual administración –en cumplimiento del artículo 89 del Decreto 1421 de 1993- hizo la siguiente transferencia de recursos e implementó unos nuevos indicadores con una nueva metodología como complemento del NBI (Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas):

DECRETO 164 DE 2013: Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos ($13.693.944,94 millones) Vigencia 2013.

Como se observa en la gráfica en la vigencia 2013 los alcaldes locales ejecutaron 591.000 millones de pesos acudiendo para su priorización a audiencias cerradas y la vritualización de la participación ciudadana lo que niega a todas luces la inclusión efectiva de vastos sectores populares que no se enteran o no participan en la formulación y seguimiento de los proyectos que generalmente son manejados caprichosamente por los alcaldes locales.

Lo anterior conlleva ante la ausencia de controles a denuncias de corrupción como las que recientemente se registraron en los medios y que fueron objeto de debates en el Concejo de la Capital (El Tiempo, sección Bogotá, 18 de julio de 2014).

Se requiere con urgencia que las comunidades participen en la elección de sus dignatarios locales y se dé cumplimiento a los mandatos constitucionales, al estatuto para la participación, el estatuto anticorrupción, a las leyes que obligan a todas las entidades a cumplir con el derecho fundamental de acceso a la información transparente oportuna pertinente y accequible para que los ciudadanos contribuyan y participen en el control a la gestión pública como pilar fundamental de la democracia.

La distribución de los recursos por parte de la administración distrital debería tener como fundamento la masiva participación de la ciudadanía de las diferentes UPZ (Unidades de Planeación Zonal) que conforman el Distrito Capital para que de conformidad con el propio perfil y las características socioeconómicas y políticas definieran la inversión correspondiente a cada localidad; si se aplicara rigurosamente los principios de presupuestos participativos y priorización incidente de las legítimas expectativas de desarrollo que postulan las comunidades y las fuerzas sociales arraigadas en los distintos sectores de Bogotá. La ausencia de legitimidad de los actuales mandatarios locales y su poca o ninguna ascendencia sobre la ciudadanía, hace que se evidencie la nula participación en un tema tan crucial como es la administración de los recursos dejando naturalmente esta tarea a funcionarios y tecnócratas que pueden tener la mejor intención pero que desconocen la realidad fáctica de los territorios.

La nueva propuesta de indicadores, la metodología y el resultado de este ejercicio se pueden observar en las siguientes tablas:

|  |  |
| --- | --- |
| Los lineamientos de política para las líneas de inversión local se definieron en la Directiva 005 de 2012 por parte del alcalde mayor priorizando el 40% para maya vial y el 60% a los sectores estratégicos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital |  |
|  |  |

Fuente: Documento N° 1 Política Económica y Fiscal – CONFIS.

Ubicación: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/PoliticaEconomicaYFiscal/Publicaciones/Publicacion\_Confis1\_11\_01\_2013.pdf

**CRÍTICA SITUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BOGOTÁ**

No podemos seguir legislando a espaldas de la ciudadanía; pretender mantener la figura de los alcaldes locales designados como producto de mecanismos que satisfagan mezquinos intereses como el actual procedimiento de terna enviada por la JAL(Juntas Administradoras Locales) al alcalde mayor para que allí se designe al representante de la comunidad local, es a todas luces más que absurdo si observamos detenidamente qué está pensando la ciudadanía de Bogotá frente a su papel en los procesos que han sido diseñados por el estatuto orgánico de Bogotá y la misma Constitución.

Es cierto que la legitimidad basada en la legislación formal puede existir en la letra fría de la norma, pero la sociedad no participa de su supuesta eficacia; recobra y se ratifica la teoría formulada por el profesor Habermas sobre la inefable necesidad de legislar con consensos, con participación real y efectiva de la ciudadanía la cual pueda incidir en los contenidos normativos en este caso, la elección de sus dignatarios esté revestida de una legitimidad basada en una legalidad democrática donde el pueblo participe en la distribución del poder político en su territorio a través del sufragio directo.

Estos presupuestos de Legitimidad analizados están muy lejos de su realización en la realidad político-administrativa de nuestra ciudad; de acuerdo con los resultados de la encuesta de Percepción Ciudadana del 2012 y 2013 del Programa Bogotá Cómo Vamos, demuestra que la razón principal que  señalan es con el 71% que no se le ha permitido a la gente influir en las decisiones de las autoridades locales, el 67% considera que no se ha permitido a organizaciones y líderes hablar de igual a igual con las autoridades locales y el 55% que tales instituciones locales han sido manipuladas por la politiquería y la corrupción.

Por otra parte,  la Encuesta Bienal de Culturas 2013 de la Secretaria de Cultura, evidencia que  los resultados sobre conocimiento de espacios e instancias de participación también son preocupantes. No conocen los espacios de participación: Cabildo Plan de Desarrollo el 88,4%, no conocen los Presupuestos Participativos 90.1%, eventos de rendición de cuentas 87,07%, Encuentros Ciudadanos 82,88%, Consejos de Planeación Local 89,32%, Consejo Distrital de Planeación 91,17%, Cabildos Abiertos 89,75%, Consejo Distrital de Cultura, que es uno de los más organizados y dinámicos de la ciudad 91,32%, otros Consejos para definir políticas 93,41%. En consecuencia los resultados sobre si ha asistido son bajos para todos.

En un contexto general, no existe una política pública incorporada a la participación ciudadana; hasta ahora tenemos la presencia de la figura de la desconcentración de funciones administrativas en los entes de las localidades del Distrito Capital; lo que corresponde en adelante es fundamentar el sentido que genera la proyección institucional hacia la descentralización dándole un nuevo giro a la reglamentación constitucional desarrollada por ejemplo en el Estatuto Orgánico de Bogotá Decreto 1421 de 1993.

En este último sentido, es que la Norma Superior da vía libre al camino de la real participación política con integralidad en condiciones de equidad e igualdad con el buen sentido democrático. Esto es lo que se busca con el proceso descentralizador del poder orientado al estímulo y a la promoción de la participación popular como estrategia en torno a la creación y consolidación de nuevos espacios para la democracia y la descentralización a través de la elección popular de alcaldes locales.

 Continuando con esta cronología de la apatía ciudadana, la encuesta de percepción ciudadana Bogotá 2013 nos ilustra la crisis por la que atraviesa la participación en Bogotá donde cabe resaltar que el 58% de los ciudadanos en el 2012 y el 49% de los ciudadanos en el 2013, no realizaron ninguna acción como asistir a convocatorias o participar en acciones que afecten a su comunidad porque además consideran que el Estado no soluciona de manera efectiva sus expectativas.

A si mismo en cuanto a la vinculación a organizaciones o grupos en el 2012 el 70% y en el 2013 el 68% respectivamente no han participado ni han mostrado interés en vincularse. 7 de cada 10 bogotanos no forma parte de ninguna organización o grupo.



Fuente: ‘Bogotá Cómo Vamos’ – sitio web www.bogotacomovamos.org.

URL:<http://www.bogotacomovamos.org/media/uploads/documento/195/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2013-bogota_1.pdf>.

El controvertido Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) es un ejemplo más de cómo la administración carece de estrategias y mecanismos que posibiliten la participación incidente de la ciudadanía en temas cruciales de la agenda pública distrital. El 97% del total de la población está al margen de las decisiones.



Fuente: “Bogotá Cómo Vamos” – sitio web [www.bogotacomovamos.org](http://www.bogotacomovamos.org).

URL: http://www.bogotacomovamos.org/media/uploads/documento/195/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2013-bogota\_1.pdf

Las encuestas reafirman que nuestras consideraciones sobre la grave crisis de participación de la sociedad civil, es el escepticismo. La deslegitimación de la mayor parte de nuestras instituciones incluido el congreso 69% de desfavorabilidad, nos convocan a cumplir con el deber constitucional de legislar interpretando la voluntad general de la ciudadanía que reclama herramientas jurídicas que los empodere como actores de su propio destino en el marco de una democracia real para que hagan efectivos los mecanismos de participación y propicien la elección de sus alcaldes locales en el Distrito Capital.

En este sentido se ha pronunciado en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional para refrendar la participación del ciudadano y su protección frente a los mecanismos de participación democrática. En este sentido agrega la Corte Constitucional en sentencia 011 de 1994 “En otras palabras, al interpretar de manera integral, como son su deber y su potestad, el espíritu de la Constitución Política, para la Corte es claro que al introducir aquella el concepto de democracia participativa (Art. 1o.), al atribuirle la soberanía al pueblo (Art. 3o.), al otorgarle por consiguiente a éste la potestad de revocar el mandato de los elegidos (Arts. 40, num. 5 y 103), y en particular el de los gobernadores y los alcaldes (Art. 259), al determinar la responsabilidad política de los elegidos frente a sus electores (Art. 133) y al disponer, en fin, que los ciudadanos eligen en forma directa, entre otros funcionarios a los alcaldes y a los gobernadores (Arts. 260, 303 y 314), el objetivo esencial que la Constitución persigue en esta materia es el de que al ejercer el pueblo el derecho a elegir sus gobernantes, lo haga con la plenitud de las consecuencias que este derecho implica y que incluyen la de que, al producirse la manifestación de la voluntad popular en las urnas, quien resulte elegido disponga de la totalidad de las atribuciones y del período que la Constitución asigna al cargo. Como según la Carta Política, la revocación del mandato solo es predicable de los gobernadores y los alcaldes, solo a estos funcionarios se aplicará este principio”.

**ALCALDES LOCALES SIN AUTONOMIA**

Los alcaldes locales son seleccionados por el alcalde mayor de una terna elaborada por la JAL correspondiente previo un proceso de selección por méritos. No tienen período fijo y pueden ser removidos por el alcalde mayor en cualquier momento, tienen por tanto una situación ambigua e inestable por cuanto en principio responden a un proceso político local pero responden jerárquicamente al Alcalde Mayor.

Son al tiempo supuestamente representantes de una comunidad política local donde no participa la ciudadanía y delegados de una autoridad superior. Esta situación refleja la coexistencia de dos concepciones sobre las localidades que conducen en la práctica a que los alcaldes locales sean una figura débil y casi inexistente, sin vínculos con la localidad y de muy poca recordación dentro de la estructura de gobierno y administración de la ciudad.

La estructura vigente está definida en el artículo 3o del decreto 539 de 2006, expedido en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 119 del Acuerdo 257 de 2006, sobre estructura administrativa del Distrito.

 En un primer momento la ley 1ª de 1992 les asignó período fijo de gobierno, con lo cual les garantizaba cierta autonomía y estabilidad. Sin embargo, esta situación no duró mucho por cuanto el decreto-ley 1421 de 1993 suprimió el período fijo, con lo cual actualmente tienen menos estabilidad que un gerente de hospital

La autonomía de las localidades y de sus autoridades es bastante limitada desde el propio diseño. Los aspectos principales donde se limita la autonomía son la carencia de competencias exclusivas y la subordinación a autorizaciones distritales, la ausencia de personería jurídica y de una estructura administrativa propia, la carencia de un período fijo de los alcaldes locales.

Los recursos de los fondos de desarrollo local no se pueden destinar a financiar gastos de funcionamiento, con excepción de los honorarios de los ediles, lo cual significa que las localidades no cuentan con estos recursos para financiar una planta propia de personal y dependen por tanto de la asignación de funcionarios determinada por la administración distrital.

El decreto 1421 de 1993 establece que “las funciones técnicas y administrativas necesarias para su normal operación serán cumplidas por los funcionarios que el alcalde Mayor y otras entidades distritales pongan a disposición de la respectiva localidad”.

Para cumplir con esta disposición, se creó dentro de la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno la figura de las Alcaldías Locales como una dependencia más.

**Recursos humanos:** los ediles se financian con cargo a los recursos de los fondos de desarrollo local, pero los alcaldes locales y el personal se financian con cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento asignado a la Secretaría de Gobierno.

**Recursos de funcionamiento:** los gastos de funcionamiento de las localidades son asumidos por la Secretaría de Gobierno.

Recursos de infraestructura física y técnica: las sedes, equipos, muebles, vehículos, etc., son financiados tanto con recursos de los FDL como de recursos de inversión de la Secretaría de Gobierno

**Énfasis excesivo en la función policiva de los alcaldes locales en detrimento de su papel como promotor del desarrollo local.**

Los alcaldes locales tienen funciones provenientes de diversas normas. El decreto 1421 de 1993 les establece unas atribuciones, algunos acuerdos del Concejo, como por ejemplo el código de policía, les fija funciones, y el alcalde mayor le delega otras funciones. La suma de todas estas fuentes de asignación de funciones conduce a una situación excesiva e inconveniente.

El artículo 86 del decreto 1421 de 1993 asigna atribuciones a los alcaldes locales, las cuales pueden clasificarse en la siguiente forma: reglamentar los acuerdos locales, coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad y vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares.

Misionales: velar por la tranquilidad y la seguridad ciudadanas, en el marco de las disposiciones vigentes; vigilar el cumplimiento de las normas sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana; expedir o negar permisos de funcionamiento; protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente.

Conceptuar sobre la expedición de permisos para la realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en la localidad; conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo, e imponer las sanciones correspondientes; expedir los permisos de demolición en los casos de inmueble que amenazan ruina; ejercer, de acuerdo con la ley, el control de precios, pesas y medidas y emprender las acciones necesarias para evitar o sancionar el acaparamiento y la especulación.

El decreto 1421 de 1993 no incluye dentro de las atribuciones de los alcaldes locales la elaboración del proyecto de plan de desarrollo y de presupuesto o la dirección administrativa de la localidad, funciones básicas que debería tener el ejecutivo. Este vacío es subsanado en los Acuerdos sobre planeación y presupuesto en los cuales se les asigna la función de elaborar y presentar a consideración de la JAL los proyectos de Plan de Desarrollo y de Presupuesto Local.

Predomina una concepción orientada principalmente hacia la aplicación de las normas de policía, urbanismo y ambiente. El Código de Policía (Acuerdo 79 de 2003), reglamenta el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas de acuerdo con la Constitución y la ley con fines de convivencia

El Acuerdo 13 de 2000 y el Decreto 1139 de 2000 establecen los comportamientos favorables a la convivencia, las sanciones por su incumplimiento y las funciones de las autoridades de policía. Con relación a los alcaldes locales define su función básica y sus competencias. Mediante diversas normas el alcalde mayor delegó funciones en los alcaldes locales, las cuales fueron compiladas en el decreto 854 de 2001, la gran mayoría de ellas relativas a control de la aplicación de normas y regulación de la actuación de los particulares.

El balance general muestra dos características: a) un énfasis en el papel del alcalde local como funcionario de control en asuntos urbanísticos, de construcción, de usos del suelo, de establecimientos de comercio y de convivencia; b) un énfasis hacia el papel del alcalde local como funcionario desconcentrado del alcalde Mayor en el territorio”[[11]](#footnote-11)

**Experiencias internacionales sobre Elección Popular de Alcaldes Locales.**

**Caso Perú.**

 **Constitución Política.**

**-El artículo 43** de la Constitución Política del Perú declara a esta nación como una República unitaria, soberana e indivisible.

**-El artículo 189** superior dispone dentro del principio de descentralización que el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son  las provincias y los distritos

Dentro de este esquema, los Distritos son subdivisiones que representan las unidades territoriales político-administrativas menores del país.El gobierno de cada distrito está a cargo de una [municipalidad distrital](http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidades_del_Per%C3%BA) **encabezada por un alcalde elegido por sufragio universal cada 4 años**.

Lima la capital, está dividida en cuarenta y tres distritos conformando un régimen administrativo especial similar al de Bogotá D.C., con preponderancia de la descentralización administrativa como una forma de organización democrática  que constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio,  que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral. (CPP).

**Caso España**

España es en la actualidad un país descentralizado que ha establecido la ordenación territorial del poder en torno al denominado Estado Autonómico. Esta denominación es única del constitucionalismo español y no se encuentra en otra legislatura u organización política del mundo.

Teniendo en cuenta este principio, el caso español da luces y avances en el marco de la descentralización. Por un lado en cada ciudad existen los concejos Municipales. Estos concejos Municipales Sectoriales son los órganos complementarios municipales que tienen por objeto canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los diversos asuntos municipales. Estos se escogen mediante voto popular de la ciudadanía. Caso similar a lo que ocurre en la ciudad de Bogotá y su Concejo.

 El país ibérico va más allá en el tema de descentralización y en el marco de la organización administrativa; ha creado los concejos municipales para que acompañen a cada distrito de la ciudad. Así, en Madrid hay 21 distritos, los cuales se subdividen en barrios. Cada uno de los distritos está administrado por la Junta Municipal del Distrito, en el que junto a cargos electivos, se articula la participación ciudadana a través de los vecinos-vocales. Los administradores de estas juntas son escogidos por la Junta Municipal del Distrito; en otras palabras, la ciudadanía escoge indirectamente a los administradores de la junta. Se podría decir que estos concejos son similares a las Juntas de Administradoras Locales (JAL) que funcionan en la capital colombiana.

**Algunos cambios recientes en la Autonomía Política en la participación ciudadana en Latinoamérica. (Fuente informativa libro “América Latina tras una década de reformas”).**

**A continuación desde un panorama general, queremos resaltar la situación en la que se encuentran algunos países latinoamericanos referente a la evolución democrática y a participación electoral de la población**.

**Argentina.** Año 1994. Reforma constitucional. Se crearon nuevas entidades territoriales. Se confirió mayor autonomía a los entes territoriales. Se otorgó autonomía a la ciudad de Buenos aires. Se crean mecanismos de consulta popular.

**Bahamas.** Año 1996. Nueva ley de elección de gobiernos locales. Se crea un mecanismo que permite elecciones a nivel local.

**Bolivia.** Año 1994. Reforma Constitucional. Se aumenta el período de mandato local a 4 años. Se elimina la relación de jerarquía de los concejos municipales de capitales de departamentos sobre los concejos municipales provinciales.

**Brasil.** Años 1982, 1985, 1988. Reforma constitucional. Se permite la elección de gobernadores de estados. Elecciones directas para las prefecturas de las capitales de municipio. Ampliación de la autonomía política y financiera de los GSN, y consagración formal de un régimen democrático multipartidario. Introducción de mecanismos como plebiscitos y referendos.

 Años 1996 y 1997. Aprobación parcial de una enmienda constitucional. Permite la elección inmediata de gobernadores de estados y alcaldes. Se establece un sistema que permite la elección de alcaldes en fechas distintas a las elecciones de las autoridades nacionales y estatales.

**Chile.** Año 1991. Ley de reforma Constitucional No. 19.097. Se implementa un sistema de elecciones municipales. Se crea el nivel regional de gobierno.

 Año 1992. Decreto supremo 662. Aprueba nueva ley de municipalidades en la que se desarrolla el sistema de elección de alcaldes y concejales.

 Año 1993. Decreto Supremo 291. Se aprueba nueva ley sobre gobierno y administración regional. (los funcionarios de gobierno no son de elección popular).

**Colombia.** Año 1986. Acto Legislativo No. 1. Se autoriza la elección popular de alcaldes.

 Año 1991. Reforma Constitucional. Se reafirma la elección popular de las autoridades de los GSN. A los alcaldes se suman los gobernadores de departamentos como oficiales electos. Se establece la no coincidencia de esas elecciones con las del nivel central.

 Año 1994. Ley 31. Establece mecanismos para la revocación de mandato a gobernadores y alcaldes por incumplimiento de los programas de gobierno sobre los que fueron electos.

**Ecuador.** Año 1991. Se establece un sistema que permite elegir diputados provinciales y concejales municipales en fechas distintas a las elecciones de nivel central.

**Honduras.** Año 1991. Reformas a la ley electoral y de las organizaciones políticas. Separación de las boletas de votación de los niveles central y locales.

**México.** A partir de 1997. Elección popular del gobernador del Distrito Federal por primera vez.

**Nicaragua .**Año 1995. Nueva ley de elecciones. Cambia la mecánica de elección de alcaldes: de ser electos por los concejos municipales a ser electos por votación directa (mayoría relativa).

**Perú.** Año 1992. Reforma Constitucional. Se resta autonomía al nivel intermedio de forma que existen solo dos niveles electivos de gobierno.

**República Dominicana.** Año 1994. Reforma constitucional. Se separan las elecciones presidenciales de las legislativas a nivel central y de las elecciones locales.

**Venezuela.** Año 1989. Promulgación de la ley sobre elección y remoción de gobernadores de Estados. Se permite la elección popular de gobernadores de Estados por primera vez.

 Año 1.989. Reforma a la Ley de Régimen Municipal. Se cambia el sistema de elección de alcaldes municipales. De ser nombrados por los Concejos municipales, los alcaldes pasan a ser elegidos por votación popular directa.

**Registro latinoamericano sobre elecciones y participación ciudadana del poder Ejecutivo del orden regional y local. (fuente, informativa libro “América Latina tras una década de reformas” ).**



**En el mismo estudio latinoamericano en el capítulo sobre adopción de decisiones fiscales en las democracias descentralizadas, se afirma lo siguiente: “ En un contexto de mayor autonomía con respecto al gobierno central, la única forma de evitar la corrupción y otras conductas de los funcionarios públicos orientadas a satisfacer sus intereses personales es el control por parte del electorado**. Si este control es deficiente, la descentralización puede agravar los problemas relativos a la calidad de la gestión de gobierno y a la responsabilidad de los funcionarios. En resumen, en un sistema descentralizado en el cual no existe participación política y cívica las probabilidades de fracaso son mucho mayores que en un sistema con alto grado de participación política y cívica”.

**5. CONCLUSIONES.**

La Constitución Política de Colombia de 1991 incorporó los principios conquistados por el liberalismo filosófico tales como la democracia, la participación, un orden político, económico y social justo, los cuales fueron desde sus inicios refrendados por la revolución francesa, la declaración de los derechos del hombre y la parte dogmática de las constituciones occidentales. Esta tradición democrática ha sido pilar básico para el desarrollo institucional de nuestro país.

Como Estado social de derecho se organizó como República unitaria dotando a sus entidades territoriales de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la constitución y la ley para los cual podrán ejercitar derechos como gobernarse por autoridades propias y ejercer las competencias atribuidas en sus territorios conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad en los términos de la ley.

Nuestro mismo estatuto básico definió a la capital del país como distrito especial por lo que es necesario rescatar el principio descentralizador que la Constitución previó. La distribución del poder político debe ser patente en todos los procesos de la vida distrital y nacional, particularmente en el ejercicio de los derechos de participación tanto en la democracia representativa como en la democracia directa en el entendido que ésta a partir de la Constitución de 1991 es una democracia mixta. La intervención incidente de la ciudadanía se requiere como instrumento para generar una gestión pública admirable con compromiso territorial que garantice el pleno derecho a la ciudadanía de acceder a las definiciones claves de la administración local; es deseable que se conformen localidades descentralizadas política y administrativamente con el fortalecimiento de sus núcleos sociales y la construcción permanente de tejido social.

Solo la autonomía local permitirá que las políticas públicas tanto sectoriales como locales reflejen el querer y la voluntad de los ciudadanos integrados en sus respectivos territorios. El ciudadano debe tener la oportunidad de elegir sin cortapisas a sus autoridades locales lo cual permitirá que los mismos se vinculen a la gestión pública distrital y local con criterios de desconcentración focalizados hacia el desarrollo de las localidades.

Estos objetivos nos abocan a hacer reformas de carácter constitucional como es la que se busca hacer a través del presente acto legislativo, pero también a buscar sinergias entre la administración distrital y el Concejo de la capital que apunten a desarrollar las facultades contenidas en el Estatuto de Bogotá Decreto ley 1421 de 1993, por ejemplo, para darle mayores herramientas a los alcaldes elegidos popularmente mediante acuerdos que permitan los cambios principales propuestos a saber:

a) Asignación de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio a las localidades; b) Eliminación de los fondos de desarrollo local y creación de una transferencia para funcionamiento e inversión; c) Asignación de la representación legal de los fondos a los alcaldes locales; d) Precisión de las funciones de los alcaldes locales para ratificar su papel de dirección y ejecución de la gestión local.

En cualquier caso, las propuestas sobre división territorial deben formularse teniendo en cuenta las decisiones sobre distribución de competencias y naturaleza jurídica de las localidades. La óptica con la que se debe mirar la gestión distrital implica que los indicadores del Plan de Desarrollo Distrital sean el producto de formulación de metas por localidad, esto significa que los sectores en sus planes de acción ejecuten los recursos propios sin echar mano de los recursos locales como ocurre actualmente en las veinte localidades donde se priorizó la destinación del 40% de la inversión a la malla vial en detrimento de planes, programas y proyectos locales; solo así se podrá buscar la cercanía con la comunidad.

Debemos plantear un gran compromiso que vincule la voluntad política de todos los sectores para que estas propuestas sean de buen recibo, lo cual conlleva generar líneas de trabajo y estrategias de acercamiento considerando el beneficio de los bogotanos por encima de los intereses particulares. Es importante generar un gran debate a nivel de Bogotá para retomar iniciativas planteadas en el seno de las fuerzas políticas sociales y comunitarias.

Se propone igualmente que se logre un alto grado de autonomía de los territorios para lo cual se sugiere aumentar las transferencias presupuestales hasta en un 15% así como competencias funcionales y operativas. Necesitamos ampliar nuestra democracia para no seguir enterándonos a diario de encuestas de percepción ciudadana que ante su apatía y marginamiento muchas veces institucional contribuyen a deslegitimar nuestro Estado Social de Derecho.

1. **PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 076 DE 2014 CAMARA acumulado al PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 079 de 2014 “Por el cual se modifican los artículos 323, 259 y 260 de la constitución política de Colombia”.**
2. Adiciónese un inciso al artículo 323 de la Constitución Política de Colombia, el cual será del siguiente tenor:

Para el caso del alcalde mayor, éste será elegido por la mitad más uno de los votos secretos que depositen los ciudadanos en la fecha determinada por la Ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde en la que solo participarán los dos (2) candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Será elegido alcalde mayor Bogotá quien obtenga el mayor número de votos.

**En consecuencia, el artículo 323 de la Constitución Política quedará de la siguiente manera:**

Artículo 323. El Concejo Distrital se compondrá de cuarenta y cinco (45) concejales.

En cada una de las localidades habrá una junta administradora, elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años, que estará integrada por no menos de siete ediles, según lo determine el concejo distrital, atendida la población respectiva.

La elección de alcalde mayor, de concejales distritales, de alcaldes locales y de ediles se hará en un mismo día por períodos de cuatro (4) años y el alcalde mayor y los alcaldes locales no podrán ser reelegidos para el período siguiente.

Para el caso del alcalde mayor, éste será elegido por la mitad más uno de los votos secretos que depositen los ciudadanos en la fecha determinada por la Ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde en la que solo participarán los dos (2) candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Será elegido alcalde mayor quien obtenga el mayor número de votos.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde mayor para el tiempo que reste, y alcalde local para el mismo efecto. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará alcalde mayor para lo que reste del período, y el alcalde mayor al alcalde local respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

 Los alcaldes locales serán elegidos popularmente por circunscripción electoral local. Las calidades, atribuciones, funciones, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y las demás que le sean inherentes y aplicables a su cargo serán las previstas en la Constitución política y en las leyes vigentes para los alcaldes municipales.

En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor, y este último a los alcaldes locales.

Los concejales y los ediles no podrán hacer parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas.

JUSTIFICACIÓN.

Se propone adicionar con un inciso para segundo debate el artículo 323 de la Constitución Política de Colombia consagrando la segunda vuelta para la elección el Alcalde Mayor del Distrito Capital, en virtud a la importancia que representa el cargo de Alcalde, toda vez que se constituye en el segundo cargo a nivel nacional de elección popular para una ciudad con más de 8 millones de habitantes y que la propia constituyente de 1990 le fija un Estatuto especial. A demás, si pensamos en legitimidad, los últimos resultados electorales han demostrado que los alcaldes de esta ciudad han sido elegidos solo con el 32.32% de los votos, lo que hace creer que la ciudadanía no estaría conforme por lo menos en términos de participación y representación.

Los ponentes seguimos insistiendo en la profundización de la descentralización, de la participación y en el derecho de la comunidad a elegir sus propias autoridades pero con un mandato pleno en legitimidad para gobernar, lo cual solo se logra con mecanismos como los de segunda vuelta, tal como se consagra para Presidente y Vicepresidente de la República.

1. Adiciónase un artículo nuevo al texto del articulado de la ponencia propuesto para segundo debate, del siguiente tenor:

Artículo 4. El Decreto Ley 1421 de 1993 o el que haga sus veces como Estatuto Orgánico de Bogotá, reglamentará lo correspondiente a las funciones administrativas, presupuestales, funcionales y de policía o de cualquier otro carácter en el marco de establecer las competencias para los alcaldes locales.

De tal manera que el actual artículo 4 de la ponencia sobre Vigencia y Derogatoria pasa a ser el artículo 5.

**7**. **PROPOSICIÓN.**

Por las anteriores consideraciones nos permitimos rendir ponencia favorable para segundo debate y someter a discusión y votación de los honorables miembros de la Plenaria de la Cámara de Representantes el **PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 076 DE 2014 CAMARA acumulado al PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 079 de 2014 “Por el cual se modifican los artículos 323, 259 y 260 de la constitución política de Colombia”.**

Cordialmente,

**CLARA ROJAS JUAN CARLOS LOZADA VARGAS**

Representante a la Cámara. (C) Representante a la Cámara (C).

**CARLOS ARTURO CORREA MOJICA EDWAR D. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.**

Representante a la Cámara (C). Representante a la Cámara.

**OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE. CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO.**

Representante a la Cámara. Representante a la Cámara.

**ANGELICA ELIZBETH LOZANO CORREA. JOSÉ RODOLFO PÉREZ SUÁREZ**

Representante a la cámara Representante a la cámara

**JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ. JOSÉ EDILBERTO CAICEDO.**

Representante a la cámara Representante a la Cámara.

**8.TEXTO DE ARTICULADO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 076 DE 2014 CAMARA acumulado al PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 079 de 2014 “Por el cual se modifican los artículos 323, 259 y 260 de la constitución política de Colombia”.**

**El Congreso de Colombia**

**DECRETA.**

**Artículo 1.**El artículo 323 de la Constitución Política de Colombia quedará de la siguiente manera.

Artículo 323. El Concejo Distrital se compondrá de cuarenta y cinco (45) concejales.

En cada una de las localidades habrá una junta administradora, elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años, que estará integrada por no menos de siete ediles, según lo determine el concejo distrital, atendida la población respectiva.

La elección de alcalde mayor, de concejales distritales, de alcaldes locales y de ediles se hará en un mismo día por períodos de cuatro (4) años y el alcalde mayor y los alcaldes locales no podrán ser reelegidos para el período siguiente.

Para el caso del alcalde mayor, éste será elegido por la mitad más uno de los votos secretos que depositen los ciudadanos en la fecha determinada por la Ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde en la que solo participarán los dos (2) candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Será elegido alcalde mayor quien obtenga el mayor número de votos.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde mayor para el tiempo que reste, y alcalde local para el mismo efecto. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará alcalde mayor para lo que reste del período, y el alcalde mayor al alcalde local respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

 Los alcaldes locales serán elegidos popularmente por circunscripción electoral local. Las calidades, atribuciones, funciones, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y las demás que le sean inherentes y aplicables a su cargo serán las previstas en la Constitución política y en las leyes vigentes para los alcaldes municipales.

En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor, y este último a los alcaldes locales.

Los concejales y los ediles no podrán hacer parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas.

**Artículo 2.** El artículo 259 de la Constitución Política de Colombia quedará de la siguiente manera:

Artículo 259. Quienes elijan gobernadores, alcaldes y alcaldes locales del Distrito Capital de Bogotá, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático.

**Artículo 3.**El artículo 260 de la constitución Política de Colombia quedará de la siguiente manera:

Artículo 260. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Alcaldes locales en el Distrito Capital de Bogotá Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale.

**Artículo 4.** El Decreto Ley 1421 de 1993 o el que haga sus veces como Estatuto Orgánico de Bogotá, reglamentará lo correspondiente a las funciones administrativas, presupuestales, funcionales y de policía o de cualquier otro carácter en el marco de establecer las competencias para los alcaldes locales.

**Artículo 5.** Vigencia y Derogatoria. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones normativas que le sean contrarias, en especial las relativas a las materias contenidas en el Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá.

**CLARA ROJAS JUAN CARLOS LOZADA VARGAS**

Representante a la Cámara. (C) Representante a la Cámara (C).

**CARLOS ARTURO CORREA MOJICA EDWAR D. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.**

Representante a la Cámara (C). Representante a la Cámara.

**OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE. CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO.**

Representante a la Cámara. Representante a la Cámara.

**ANGELICA ELIZBETH LOZANO CORREA. JOSÉ RODOLFO PÉREZ SUÁREZ**

Representante a la cámara Representante a la cámara

**JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ. JOSÉ EDILBERTO CAICEDO.**

Representante a la cámara. Representante a la Cámara.

1. BOBBIO, Norberto y BOVERO, Michelangelo. “Origen y Fundamentos del poder Político”, en Enlace. México: Grijalbo, 1990, p. 22-30. [↑](#footnote-ref-1)
2. MARTÍNEZ FERRO, Hernán. Legitimidad, razón y derecho. [↑](#footnote-ref-2)
3. SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Derecho Electoral Colombiano. 2da edición. Bogotá D.C.: Legis, 1997. p. 114. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ídem, p.115. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ipsos Napoleón Franco. Informe Bogotá Cómo Vamos. Bogotá: 2007.documento en PowerPoint, diapositiva número 138. [↑](#footnote-ref-5)
6. Universidad Militar Nueva Granada. Gestión de la administración pública a nivel local, Informe de resultados. 2007, documento en PowerPoint, diapositiva número 102. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ídem, diapositiva número 168. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ídem, diapositiva número 95. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ídem, diapositiva número 146. [↑](#footnote-ref-9)
10. Refiriéndose a los objetivos y alcances de la descentralización de la ciudad, manifestaba Jaime Castro, quizá el principal promotor de esta reforma, lo siguiente: “Un conglomerado de esas dimensiones y características –que, además, hace las veces de capital política y administrativa deColombia- no se podía continuar gobernando desde un solo centro de poder…” “Es un proceso de naturaleza esencialmente política. Busca ante todo repartir o distribuir el poder que antes ejercían la Alcaldía Mayor, el aparato que de ella dependía y el Concejo Distrital. Para ello tiene que crear varios centros de poder local.” A partir de este reparto del poder y de oportunidades, surge una nueva forma de gobierno y de administración de la ciudad que es por excelencia democrática, pluralista y participativa. Esa nueva forma de gobierno y de administración crea una nueva cultura política en los(as) habitantes de la ciudad.” (pág10) (Los subrayados no están en el original) [↑](#footnote-ref-10)
11. Alcaldía Mayor de Bogotá. Política de Descentralización Territorial para Bogotá: Hacia la democracia local. 2009. [↑](#footnote-ref-11)